Revista nuestrAmérica
E-ISSN: 0719-3092
contacto@revistanuestramerica.cl
Corriente nuestrAmérica desde Abajo
Chile

Becher, Pablo Ariel; Klappenbach, Germán
Mascarillas y piquetes en Ingeniero White. La conflictividad social asociada a la problemática medioambiental de las empresas petroquímicas durante el año 2000
Revista nuestrAmérica, vol. 2, núm. 3, enero-junio, 2014, pp. 105-126
Corriente nuestrAmérica desde Abajo
Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551956253008

Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Mascarillas y piquetes en Ingeniero White. La conflictividad social asociada a la problemática medioambiental de las empresas petroquímicas durante el año 2000

Pablo Ariel Becher[64] y Germán Klappenbach[65]

pp. 105-126

Resumen: El presente artículo de investigación pretende analizar la conflictividad social provocada por el escape de gases tóxicos de empresas petroquímicas, localizadas en cercanías de la localidad de Ingeniero White, en el año 2000. Los reclamos generalizados en torno la salud, el trabajo y el medio ambiente provocaron una politización aguda de la situación entre diversos actores sociales. La lucha política de los vecinos de White implicó la puesta en consideración de diversas modalidades de protesta social, demostrando formas de organización y una serie de respuestas sectoriales de parte del poder político y económico.

Palabras claves: conflictividad social, empresas petroquímicas, organizaciones políticas, Ecología Política.

Abstract: This research article tries to analyze social conflicts caused by the escape of toxic gases from petrochemical companies located around the town of Ingeniero White, in 2000. The generalized complaints around health, job and the environment caused an acute politicization of the situation among different social actors. The political struggle of residents from White implied to consider various modalities of social protest, showing organization forms and a series of sectoral responses from the political and economical power.

Key words: social conflict, petrochemical companies, political organizations, political ecology.

[64] Profesor y Licenciado en Historia, Maestreando en Sociología, Universidad Nacional del Sur- Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO).
[65] Lic. en Administración, Maestreando en Sociología, Universidad Nacional del Sur- Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO).

1. Introducción

El presente estudio describe y analiza los conflictos sociales suscitados a raíz de dos accidentes industriales en las plantas petroquímicas de Solvay Indupa y Profertil, que originaron una serie de escapes de gases cloro-soda y amoníaco, en cercanías de la localidad de Ingeniero White (Argentina) entre agosto y diciembre del año 2000.

Los procesos de movilización social y reclamo de los habitantes de White implicaron una variedad de formas de manifestación social, lo que se reflejó en modalidades de auto-organización y una toma de posición frente a las grandes corporaciones y sectores políticos, en un contexto nacional marcado por el descontento social contra el gobierno de la Alianza[66].

La investigación se enmarca dentro de los estudios sobre movimientos sociales, que abordan las relaciones específicas entre "entorno natural y sociedad", imbricados en el análisis de la problemática del empleo y la conflictividad (Seoane, Taddei y Algranati, 2013). El análisis de este tipo de movimientos tiene implicancias significativas en discusión acerca de la confrontación de intereses dentro de la fase actual de acumulación capitalista (Borón, 2004)

La búsqueda de explicaciones científicas sobre la acción colectiva, los debates contemporáneos y las nuevas demandas sociales generaron un conjunto de investigaciones sobre las situaciones de movilización social e institucionalización del conflicto. De este modo aparecieron diversas escuelas que explicaban los comportamientos colectivos como producto de diversos factores: por un lado en Estados Unidos (EE.UU.) los enfoques teóricos preocupados por la movilización social han reflexionado básicamente en torno a la noción de estrategia y de racionalidad como factor explicativo, enfatizando la acción colectiva, la idea de costo beneficio como factor causal y la estructura de oportunidades políticas (McAdam, McCarthy & Zald, 1996), mientras que la tradición europea se ha orientado a un tipo de análisis centrado en la noción de identidad como característica principal para aprehender a los movimientos sociales (Melucci, 1994), concentrándose en la noción de movimiento social (Touraine, 1990).

Los problemas en torno a la comprensión y explicación de los llamados "nuevos movimientos sociales" (Offe, 1985; Melucci, 1994; Tarrow, 1997) resultan temáticas complejas para un análisis particular y simplista de la realidad social, constituyéndose en elementos teóricos de polémica y discusión en el ambiente académico y extra-universitario (Millán, 2009). En tal sentido, las propuestas más críticas rediscuten "lo nuevo" de estos movimientos tratando de observar ciertas continuidades y características dentro del proceso histórico que los anteceden. Diversas posturas observan que la intervención y organización en los movimientos sociales no puede explicarse simplemente por el hecho de que los individuos sean "impelidos" por factores psicológicos o actitudinales para participar espontáneamente, sino que tiene relación con la ubicación estructural y la agencia de los

[66] Coalición política formada por un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para el Socialismo (Frepaso) que ganó las elecciones presidenciales de 1999 a nivel nacional.

sujetos en torno a las dimensiones históricas donde se enmarca.

En relación a estos estudios, la estructura teórica de la investigación se encuentra ligada a la denominada Ecología Política (Alimonda, 2011). El objeto de estudio de la misma implica el análisis estructural de los aspectos relacionados con la utilización de la naturaleza, así como el estudio de las múltiples prácticas y representaciones sociales de actores diversos en relación con su medio. En este sentido el marco teórico permite evaluar los conflictos socioambientales desde las apropiaciones y significaciones culturales y económicas, observando las discusiones acerca de los mecanismos de poder y control de dichos sujetos sociales (Martinez Allier, 2004; Palacio, 2006) [67]. Estos conflictos, pueden plantearse en términos de controversias derivadas de formas diversas, y a veces antagónicas, de significación discursivas de la naturaleza (Vera Alpuche, 2012). La bienes comunes se vuelven objeto de dominio de las ciencias y de la producción (Leff, 2006) y en muchos casos se piensa su degradación y recuperación en términos de costos económicos, bajo el concepto de externalidades (Galafassi, 2004). El fundamento acerca de las contradicciones en el proceso de acumulación capitalista -la primera y segunda contradicción- permite comprender los mecanismos internos y externos de la degradación del actual sistema no solo contra la naturaleza, sino hacia sí misma (O´Connor, 2001)[68].

Siguiendo críticamente el argumento de David Harvey acerca de la acumulación por desposesión (Harvey, 2003), es posible redefinir algunos de sus conceptos teóricos y abordarlos desde una perspectiva que integre al proceso de colonialidad. Continuando con el planteo de Rosa de Luxemburgo, Harvey plantea que el capitalismo se encuentra en un estadio de desarrollo en el cual utiliza métodos de la acumulación originaria para mantener el actual sistema de explotación y que sean los países dependientes los que paguen los costos de la crisis de sobreacumulación. En este sentido aparecen aspectos de acumulación ligados a las relaciones entre el capital y las formas de producción no capitalistas, donde cobran relevancia diferentes estrategias como la política neocolonial, el sistema de empréstitos, la guerra, política intereses privados, violencia, opresión y rapiña. Harvey reformula algunos de los aspectos citados por Luxemburgo, y define a la acumulación por desposesión como la utilización de recursos externos y la adquisición de activos a bajo costo hacia el capitalismo (Noda, 2004). Para Harvey se produce un nuevo tipo de imperialismo que se produce por la contradicción entre los procesos minúsculos que se producen dentro de los estados- nación y la lógica territorial de los mismos. Las dificultades para la acumulación de capitales presionan al poder político a tomar partido por prácticas

[67] Un análisis más completo de las discusiones sobre lo ecológico, ambiental y las diferentes posturas puede verse en el libro de Claudio Vizia (2011) *¿Un Marx verde?, Antropología, ecología y marxismo.*

[68] Esta primera contradicción se trata en términos de lo que Marx llamó "contradicción entre la producción social y la apropiación privada", donde se produce una crisis de la demanda, debido a que el capital intenta aumentar la tasa de ganancia a través de la reducción de los costos salariales y una mayor explotación del trabajo. La segunda contradicción sucede cuando el capital implementa estrategias para reducir los costos de las fuerzas productivas, como la fuerza de trabajo, racionalización de los recursos naturales y utilización de infraestructura urbana, degradándose las condiciones generales y propiciando una crisis económica del lado de los mismos costos (O´Connor, 2001).

imperialistas, muchas veces a favor de empresas multinacionales.

En la etapa del nuevo imperialismo las acciones de resistencia de los nuevos movimientos sociales se tornan centrales para la lucha del poder territorial, pero relativiza el papel del movimiento obrero y de las acciones anticapitalistas.

En el ámbito local, desde los medios de comunicación hegemónicos se vinculó la emergencia del movimiento social ambientalista en Bahía Blanca con las deficiencias tecnológicas respecto de los controles de seguridad de las empresas petroquímicas. Sin embargo, estas consideraciones omiten deliberadamente los procesos históricos sociales relacionadas con la apropiación de la naturaleza y de los bienes comunes (Seoane, 2012) que durante décadas afectó las relaciones sociales e identitarias de los habitantes de White y la zona, bajo la idea de un supuesto progreso económico por parte del capital concentrado.

El contexto social en el cual se encuadran los hechos, tuvo como antesala una crisis económica agravada considerablemente por la inequitativa distribución del ingreso, un aumento gradual y significativo de la desocupación, un amplio proceso de privatizaciones y una creciente movilización popular como consecuencia de la crisis (Azpiazu y Basualdo, 2004).

Los hechos históricos registrados durante el año 2000 en Ingeniero White constituyen un caso de estudio sobre conflictividad medioambiental en donde se verifican empíricamente relaciones ecológicas entre diversos actores sociales (funcionarios políticos, organizaciones sindicales y empresas) y se discuten objetivos y métodos de intervención sobre la utilización de los bienes comunes.

La estrategia metodológica adoptada combinará los enfoques cualitativos -principalmente la entrevista semiestructurada (Vasilasachis de Gialdino, 2006)-, con el análisis de fuentes documentales -periodísticas[69], jurídicas- que permitan identificar cuáles fueron las acciones colectivas que resultaron claves en la dinámica del conflicto y la observación y análisis empírico de los hechos históricos.

2. Contexto histórico de la comunidad whitense

Ingeniero White se ubica en el partido de Bahía Blanca, a unos once kilómetros de la ciudad principal, con una población total que asciende a los 10.486 habitantes[70]. Producto de diversas transformaciones, el espacio whitense pasó de ser una colonia de antiguos ferroviarios y pescadores que trabajaban en cercanías al puerto de Ing. White a fines del siglo XIX (1884-1885) (Cernadas, 2001; Tolcachier, 2004), a una inmensa zona de producción,

[69] Se utilizaron periódicos locales, *La Nueva Provincia (LNP), Eco Días(ED), Bahía White (1995) y El Whitense (1996)* solicitadas de empresas y documentos de origen jurídico. Los periódicos nacionales como *Clarín* y *La Nación* ocasionalmente especificaron sobre el hecho en breves apartados.
[70] Según el censo de población del 2001.

comercialización y distribución de diversas actividades, ligadas primero a la exportación cerealera y luego a la de industrias petroquímicas (Gorestein, 1991)[71].

Durante la década de 1990, las transformaciones estructurales a nivel económico y social implicaron la implementación de medidas tendientes a la desregulación, la apertura comercial, la restructuración del empleo y la privatización, junto a la ampliación del complejo industrial portuario, que adoptó su configuración actual, como centro neurálgico a nivel nacional.

La construcción identitaria de los habitantes de Ingeniero White tuvo como uno de los factores más importantes la pertenencia a un espacio social, histórico y relacional determinado por las imágenes del puerto, las celebraciones religiosas o comunitarias y en expresiones sociales referidas a la pesca y el ferrocarril (Bellini, 2000). Sin embargo, en las últimas décadas las percepciones sociales de la comunidad formadas por la constitución y ampliación de un polo industrial, sustentado en un discurso de progreso económico, generó como contrapartida un temor permanente ligado a los peligros de la contaminación e inseguridad ambiental por el accionar industrial y la pérdida de fuentes laborales tradicionales (Parga, 2007; Torre, 2007).

3. Las empresas petroquímicas: una perspectiva temporal

Las empresas petroquímicas han jugado un rol protagónico en las políticas de desarrollo nacional para los diferentes gobiernos desde la década de 1950. Su implantación inicial obedeció a las estrategias de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con una fuerte financiación y estímulo estatal, basado en el otorgamiento de subsidios y aliento fiscal (Chudnovsky y López, 1994). En este sentido predominaba la valorización de recursos inexplorados por el capital extranjero y el carácter estratégico de contar con una industria petroquímica doméstica con inversiones y créditos preferenciales (Lopez y Chidiak, 1995), aunque generando a largo plazo endeudamiento y dependencia económica.

Las inversiones orientadas al sector petroquímico fueron reguladas dentro de un marco legal que acentuó las medidas promocionales, el suministro de recursos baratos y las exenciones impositivas (Goreinstein, 1991). La dictadura del General Juan C. Onganía, en 1967, decidió impulsar la creación de "polos petroquímicos". La factibilidad de este proyecto fue aprobada por los intereses de empresas estatales: Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (Odisio, 2008). Sin embargo, el proyecto original tuvo un impulso importante de la firma multinacional Dow Chemical que, a pesar de haber recibido la autorización para iniciar la construcción en 1969 mediante el

[71] Su carácter portuario, instalado en un primer momento por el fuerte impulso del capital inglés, presentó a la localidad como uno de los reductos principales del ramal ferroviario del sur de Buenos Aires, que en la actualidad continúa conectando las producciones regionales con los mercados externos del sudoeste bonaerense.

decreto 6908, se retiró de la iniciativa.

La decisión de la instalar industrias petroquímicas en Bahía Blanca tuvo que ver con parámetros geoestratégicos significativos: recursos estratégicamente ubicados; confluencia de líneas de comunicación extensivas a través de tierra, red vial y mar; unión de tres gasoductos troncales que venían de las cuencas austral y neuquina[72]; la presencia de salinas, y una infraestructura portuaria significativa e histórica. Con posterioridad, se construyó en 1978 un dique de contención de agua (Paso de las Piedras) que permitiría abastecer al complejo el recurso vital para el enfriamiento de maquinaria, aunque también utilizado en la ciudad como red de consumo local[73]. Las significativas exenciones impositivas que se brindaban a este tipo de empresas, junto a la posibilidad de recurrir a mano de obra barata al inicio de la construcción, se convirtieron en ventajas comparativas para la burguesía industrial que se complementaría con un laxo control sobre las seguridad, mantenimiento e higiene de los mismos.

El 21 de octubre de 1971, enmarcada en la ley 17318, quedaba constituida "Petroquímica Bahía Blanca, S. A. (PBB)", como una sociedad anónima con mayoría estatal, aunque se oficializa su inauguración en julio de 1977, con la dictadura militar (1976- 1983), que tuvo una intervención decisiva de promoción sectorial.

Posteriormente, la conformación de un mercado oligopólico, reducido a un grupo minoritario de empresas en su mayoría nacionales con apoyo del capital extranjero, lideraron la constitución de la industria de bienes intermedios (siderurgia, papel, aluminio, petroquímica y cemento) como únicos sectores que crecieron en medio de una actividad industrial en decadencia, orientando los excedentes al mercado internacional. La industria petroquímica modifica su marco regulatorio permitiendo la participación de distintos tipos de capital (nacional o extranjero) y se orienta a la conformación de complejos de gran envergadura.

En 1981, PBB pudo poner en marcha su "cracker" (planta de fraccionamiento de petróleo) en simultáneo con la planta separadora de Gas del Estado[74] y con la de polietileno lineal de baja densidad de Polisur (Odisio, 2008). La política económica instrumentada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989), dificultada por un proceso inflacionario

[72] Estas proveerían al Complejo de Petroquímicas de Bahía Blanca (CPBB) de su insumo básico, el etano contenido en el gas natural, incorporando a Gas del Estado (GE) a la alianza de empresas estatales.

[73] En Bahía Blanca esta ventaja espacial en recursos se complementa notablemente con factores económicos y políticos: ubicación estratégica portuaria ligada a la racionalidad productiva de la Pampa Húmeda, concentración de centros financieros, comerciales, escuelas técnicas, establecimientos de dos universidades (UNS y UTN) y centros de investigación regionales.

[74] El complejo petroquímico local utiliza como materia prima básica el gas natural de las cuencas austral y neuquina a través de los gasoductos Sur, Oeste y Neuba II que confluyen en la localidad de Gral. Cerri. En este punto, se ubicaba la planta separadora de Gas del Estado, vinculada al complejo por un etanoducto de 15 km de longitud, en la que se realiza el tratamiento del insumo gasífero. Actualmente el aporte gasífero para las empresas proviene de Kuwait y es importado por el estado nacional a través de buques re-gasificadores.

persistente, fuerte endeudamiento externo, déficit fiscal y una alta movilidad sectorial, alentó la continuidad y la profundización de las tendencias estructurales gestadas durante la dictadura militar. Los grupos económicos consolidados en la etapa anterior siguieron creciendo, diversificando y acentuando su inserción en el mercado mundial al amparo de los amplios subsidios estatales y exenciones impositivas.

En el contexto económico de los años '90, basado en un amplio programa de reformas estructurales, la importancia de las grandes empresas extranjeras sobre el control de sectores claves de la economía, el financiamiento y la concentración del capital, agravó la problemática de la dependencia e intensificó la apropiación de beneficios e intereses generados en el país por parte del capital extranjero en consonancia con algunos sectores de la burguesía nacional (Romero, 2009).

En 1991, PBB se desarticuló y vendió a capitales privados, que ya participaban de la compañía, una parte correspondiente a las empresas satélites con tenencia accionaria (Petropol, Polisur, Induclor y Monómeros Vinílicos) siguiendo de ese modo la estrategia de concentración. En medio del fuerte proceso de re-acomodamiento, PBB fue privatizada en 1995 a través de la ley 24045, en concordancia con la política del gobierno menemista (Gerchunoff y Torre, 1996)[75].

Si caracterizamos brevemente a las empresas petroquímicas podemos observar que las mismas no tienen efectos ínter-sectoriales y propician vínculos comerciales dependientes de la exportación para lograr incorporarse al mercado. Evidencian una desarticulación con el aparato productivo local, en la medida que no se continúan los encadenamientos hacia atrás, mientras que los beneficios promocionales hacia firmas corporativas facilitan una actividad concentrada y segmentada, agudizando las contradicciones internas locales (Gorestein, Viego y Burachik, 2006).

En el análisis del impacto directo e indirecto sobre el nivel de empleo debe contemplarse una implicancia fundamental que refiere a las características intrínsecas funcionales de esta actividad productiva que hace que las unidades del complejo sean intensivas en capital con mínimas necesidades en materia de fuerza laboral (excluyendo los primeros períodos cortoplacistas con fuerte demanda del sector de la construcción) (Odisio, 2012). Un sector del personal no estable de estas empresas petroquímicas son contratados en forma terciarizada. En este sentido, se refuerzan vinculaciones con pymes locales en materia de servicios no transables (limpieza, acondicionamiento, transporte, alquiler, distribución) y de

[75] El consorcio integrado por la empresa norteamericana Dow Chemical, la argentina YPF y la japonesa Itochu, se adjudicó en 1995, el 51% de PBB y el 38 % de Indupa. YPF y Dow negociaron en febrero de 1996 la venta de Indupa a la empresa belga Solvay. Finalmente, Dow se queda con 70% de Indupa e YPF con el 20% restante del paquete. Más tarde, Dow buscó desprenderse de Indupa ya que su interés estaba centrado en la producción de polietileno que se realiza en PBB. En cambio, Solvay buscó quedarse con Indupa para aumentar 7% su producción de ceniza de soda y 9% la de PVC. La empresas de fertilizantes Profertil dedicada a la producción de urea granulada, cuyo capital accionario mayoritario pertenece a la española Repsol y Agrium Inc. de origen canadiense, se instaló en el complejo petroquímico en el año 2000, siendo uno de los emprendimientos más grande del mundo (Romero, 2009).

actividades ligadas a la producción indirecta (con la excepción de repuestos y componentes).

4. Los inicios de las movilizaciones sociales: el estallido social y piquetazo

El 20 de agosto del 2000 se produce un escape de cloro en Solvay-Indupa, una de las plantas del complejo petroquímico en Bahía Blanca. Esta nube de gas altamente toxica de unos 600 kg., precipita en forma de lluvia a una distancia aproximada de 3 km de la localidad, que como consecuencia de la dirección del viento se dirige hacia el mar. La misma fue registrada por una innumerable cantidad de pobladores de Ing. White que inmediatamente denunciaron el incidente. El Plan de emergencia implantado desde la década de 1990 y llamado Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level (APELL) no fue utilizado el día del escape, según el propio Secretario de Medio Ambiente comunal Braulio Laurencena[76].

Al día siguiente, el intendente de Bahía Blanca, Jaime Linares, aseguró que la planta no debería arrancar hasta que estuvieran demostradas las causales del suceso y dadas las garantías de seguridad. Desde ese momento, comenzó a generarse un incipiente reclamo vecinal, buscando explicaciones sobre lo sucedido a las autoridades ambientales y empresariales. De esta forma comenzó a tomar forma la primera organización vecinal en forma asamblearia, conocida como "Vecinos Autoconvocados"[77].

Las primeras investigaciones señalaron como causante de los problemas un caño de transporte en condiciones precarias, con más de 15 años de antigüedad. Las explicaciones y las soluciones de parte del poder económico y político redundaron en términos técnicos, enfatizando las cuestiones relacionadas con la seguridad, sin ser categóricos frente a la manifestación concreta de un problema socio-ambiental de mayor envergadura[78].

El 23 de agosto, a partir de una convocatoria por parte de la Sociedad de Fomento del Barrio 26 de septiembre, un millar de whitenses en estado asambleario se expresaron abiertamente contra las empresas del polo petroquímico. En esa reunión participaron distintos actores políticos. Las propuestas del municipio fueron enfrentadas por una fuerza

[76] "La Nueva Provincia (LNP)", 21 de agosto del 2000, p. 4. El Plan de emergencia APELL (Awareness and preparedness for emergency at local level) sistema de defensa conjunta frente a una contingencia o accidente en el Polo Petroquímico, implica la intervención inmediata de las autoridades de seguridad, utilizando las radios locales para comunicar a los vecinos sobre algún accidente o incidente, promoviendo además un plan preventivo de evacuación. Es interesante constatar que hasta el día de hoy en Ing. White los problemas relacionados con una falta de infraestructura adecuada y un hospital de quemados para emergencias graves sigue siendo una carencia importante.

[77] Entrevista a Ignacio, 6 de agosto del 2010.

[78] "La Nueva Provincia", 23 de agosto del 2000, p. 8. Esto significa que los antecedentes sobre conflictos medioambientales ya eran parte de las discusiones locales, y se habían generado propuestas diversas frente a la problemática del Carbón en la termoeléctrica (1995) y la ampliación del puerto, sugerencias que habían sido postergadas por el estado.

popular que pidió efectivamente la no-permanencia de las empresas, antes de la mediación con el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.

En un clima muy tenso entre los distintos actores sociales[79], los vecinos resolvieron integrar una comisión de 15 miembros para entrevistarse con el intendente municipal en la delegación Whitense y reclamarle medidas concretas a partir de un petitorio[80]. A su vez, se decidieron a realizar los primeros cortes en los accesos de las empresas, especialmente de Solvay-Indupa y sobre el acceso al Puerto Galván.

En los días siguientes, los vecinos se organizaron y protestaron en forma de piquetes auto-organizados controlando el ingreso y egreso del personal. Estos "vecinos piqueteros" recibieron ayuda de distintos barrios aledaños y de pobladores de Bahía Blanca para alimentarse y abrigarse[81].

La reunión entre los vecinos y el intendente se concretó el 24 de agosto, donde se exigieron pautas fundamentales[82] y se manifestaron con una frase tajante: "las industrias o nosotros". Sin soluciones concretas el intendente prometió entrevistarse con el Gobernador en La Plata e intentar que se le entregara a la delegación comunal facultades de control sobre las empresas de tercera categoría.

Con posterioridad a la reunión, un grupo de personas se dirigieron a la empresa Solvay-Indupa para pedir explicaciones y realizar observaciones, junto al delegado municipal de Ingeniero White, Roberto Ursino, y otros representantes políticos. Se solicitó tomar muestras de sectores claves de producción aunque la empresa más tarde lo prohibió. Paralelamente, se registraron nuevos casos de personas afectadas por la inhalación de la nube de cloro-soda[83].

En el ámbito laboral, el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción República Argentina (UOCRA), Raúl Rubino, manifestó el apoyo a los vecinos por parte del gremio de la construcción[84]. La Confederación General del Trabajo intensificó su postura que la SPA

[79] "La Nueva Provincia", 24 de agosto del 2000, p. 9. Cabe aclarar que el Municipio (ley 11.459 y 5963), no tenía facultades legales de control, inspección ni de sanción frente a las Corporaciones industriales de tercera categoría. Dicho poder residía en la Secretaría de Política Ambiental (SPA) con sede en la ciudad de La Plata.

[80] En una nota posterior, Víctor Diez de "La Nueva Provincia" (LNP) constata a partir de la utilización de fuentes anónimas especializadas en cuestiones técnicas sobre las plantas del Polo, que el accidente del 20 de agosto no se debió a el escape de una emisión tóxica, que periódicamente expulsan las chimeneas, sino a un problema más complejo en cuanto al proceso de producción en sí y de personal idóneo. Según el autor la insistencia en perfeccionar los controles de las emisiones no solucionaría el problema de fondo.

[81] Entrevista a Claudia, empleada, 29 de agosto del 2014.

[82] "Erradicación de las plantas de la empresa Solvay-Indupa; El traspaso de todas las facultades de control e infracción ante las empresas de tercera categoría de la Provincia de Buenos Aires al Municipio; Auditorías de las empresas por parte de firmas británicas con veedores de Greenpeace"- *Manifiesto de Vecinos Autoconvocados.*

[83] "La Nueva Provincia", 25 de agosto del 2000, p 6.

[84] "La Nueva Provincia", 26 de Agosto del 2000, p. 7.

debe delegar al municipio las facultades demandadas.

Las luchas de los vecinos whitenses se encontraron motivadas por la información propiciada a través de Greenpeace, y su interlocutora Verónica Odriozola. La presencia de Greenpeace en la zona ya se había generado años anteriores, cuando la entidad estuvo presente al registrarse distintas irregularidades en las empresas petroquímicas[85].

5. El recrudecimiento del conflicto y las respuestas políticas

Linares rubricó un convenio con el gobernador de la provincia explicitando las acciones del ámbito local para que se realicen las funciones de seguimiento y control de las empresas de tercera categoría. Aparece como iniciativa del ejecutivo local un proyecto de ley presentado años anteriores por el diputado Juan Tunessi (UCR), en el que propone establecer un programa piloto para el monitoreo, control y optimización del medio ambiente en la ciudad y su zona de influencia[86].

La organización Vecinos Autoconvocados realiza un petitorio general el día 27 de agosto[87]. A diferencia de esta actividad, otras instituciones que participaban del reclamo, pero que no integraban "Autoconvocados", pidieron una serie de medidas al municipio local, en las cuales no afirman la intención de la erradicación definitiva de las empresas, diferenciándose con los manifestantes más radicalizados[88].

Ante estas diferencias, Vecinos Autoconvocados decidió desistir del reclamo de erradicación a cambio de exhaustivos controles, manteniendo la clausura de las plantas hasta tanto se verificaran sus instalaciones, pidiendo que se traslade el delegado del SPA a Bahía Blanca para entrevistarse con los vecinos y que se realice un registro de personas dispuestos a dejar la zona de riesgo previa indemnización por sus propiedades[89].

6. Un nuevo escape que complica el panorama: doble fuga de amoníaco en Profertil

[85] Odriozola recordó que Greenpeace denunció en 1998 que la planta Solvay-Indupa arrojaba en forma secreta residuos tóxicos a través de desagües pluviales.

[86] "La Nueva Provincia", 25 de agosto del 2000, p. 6. ; Diario Ecodías, año 1, Nº 5, 15- 30 de septiembre del 2000, p. 2.

[87] El petitorio constó de los siguientes puntos: 1- Cierre total de las plantas de Solvay Indupa.2- Otorgar poder absoluto a la Municipalidad con una comisión dirigida por los vecinos3- Efectuar una auditoria total de las plantas 4- Estudio de distancia de riesgo.5- Denuncia penal de la comunidad contra Solvay Indupa.6- Compromiso expreso de los legisladores a aprobar perentoriamente la ley que faculte al municipio a controlar ambientalmente a las empresas de tercera categoría, en: LNP, 28 de agosto del 2000, p. 6.

[88] Estos representantes fueron: Sociedad de Fomento de 26 de septiembre; Club de Leones, Club Defensores del Sur; Sociedad de fomento del Bulevard, Biblioteca Mariano Moreno; Caritas, Comercial, Sociedad de Fomento del barrio Salado; Bomberos Voluntarios; Sociedad de Fomento Ingeniero White; Centro de Jubilados y Agrupación Scouts Don Ernesto Pilling.

[89] "La Nueva Provincia", 28 de agosto del 2000, p. 6.

A una semana del primer escape de cloro de Solvay-Indupa, se produjeron dos fugas de amoníaco en la planta de urea de Profertil en su primera puesta en marcha. Dicho suceso vino a complicar las negociaciones que se mantenían entre el municipio y los vecinos. Además de la evacuación del Jardín de Infantes N° 905, se registraron en el Hospital Menor de Ing. White más de un centenar de afectados, con diferentes síntomas (picazón, alergias, irritación en la garganta y broncoespasmos)[90]. Nuevamente se repitió que la situación de fallas en la comunicación fue el detonante del incidente. El gerente de Profertil, Hugo Simoni, enfatizó desde el plano legal la desvinculación de la empresa al accidente, ya que por entonces la planta permanecía en etapa de construcción por Snamprogetti-Techint. Se proclamó desde el 28 de agosto el cierre de todas las escuelas en Ingeniero White hasta tanto se mejoren las medidas de seguridad exigiendo instrucción al personal docente y provisión de elementos de evacuación (mascaras, tubos de oxígeno, cintas, etc.)[91]. El bloque de concejales de la Alianza presentó inmediatamente al juzgado federal n° 2 una denuncia penal contra la empresa Profertil, acción similar que habían realizado contra Solvay-Indupa.

La Asociación Ambientalista del Sur (AAS) se manifiesto en desacuerdo con la erradicación definitiva de las empresas y expresó mediante un comunicado la puesta en marcha de un proceso continuo de control entre la comunidad y el municipio y la realización de una auditoría de las Universidades locales a las empresas. Además, destacó que deben realizarse estudios de impacto ambiental, promoviendo la no instalación de nuevas plantas[92].

Los vecinos que cortaban los accesos a la planta de Solvay-Indupa pidieron la intervención explícita del Intendente e insistieron en la presencia del Secretario General de la Secretaría de Política Ambiental, Ricardo Rodríguez a Bahía Blanca. El día 30 de agosto estos funcionarios se presentaron frente a una expectante asamblea vecinal. Con ciertos condicionamientos, los funcionarios adhirieron a un petitorio, para que se realicen controles efectivos y se tomen medidas urgentes para mejorar la calidad de vida de la población de White, incluyendo la sanción de la Ley Tunessi. La única oposición que presentó Rodríguez al petitorio fue que las auditorias no las hicieran especialistas extranjeros, ya que según su visión, podían realizarlas profesionales argentinos.

Uno de los puntos principales implicaba la conformación de un Comité de control y monitoreo, compuesto por representantes del SPA, del municipio, Concejo Deliberante, sindicales, empresariales, asociaciones ambientalistas (excluyendo a Greenpeace) y sociedades de fomento[93]. Este Comité tendría carácter consultivo, asesorando a la

[90] "Ecodías", año 1, N° 5, 15- 30 de septiembre del 2000, p. 2

[91] "La Nueva Provincia", 29 de Agosto de 2000, p. 5.

[92] Véase propuesta de Asociación Ambientalista del Sur, por Leoncio Montesarchio y Eduardo Conghos, en Documentos medioambientales, 30 de agosto del 2000.

[93] El primer Comité Técnico estuvo conformado por Alberto Carnevalli, del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; Horacio Campagna de la Universidad Tecnológica Nacional; Vicente Sanchiz de la Secretaría de Política Ambiental Provincial; Norberto Moretti de la Asociación Industrial de Bahía Blanca;

autoridad de aplicación.

Ese mismo día, la empresa Solvay-Indupa instruyó una solicitada explicando sus razones acerca del escape producido[94], mientras unos cien estudiantes secundarios de los colegios Santa María de los apóstoles, Juan José Passo, San Francisco de Asís, Enrique Mosconi y de la Escuela nº 11 marcharon, desde el centro de la ciudad hasta los accesos de las plantas de Solvay Indupa, donde se encontraban apostados Vecinos Autoconvocados [95].

La sanción de Ley Tunessi se convirtió en uno de los objetivos a alcanzar, para dirimir el conflicto. Las instancias de aprobación de la misma transcurrieron rápidamente en la Cámara Legislativa, pero quedó estacionada en la Cámara de Senadores. Si bien los ediles del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, apoyaron unánimemente el proyecto de Ley Tunessi, una parte de la bancada justicialista[96] propuso otro proyecto de comunicación con las industrias, obligadas a brindar información de sus condiciones y a proponer mecanismos de evacuación.

El conflicto continuó en dos ámbitos: por un lado en el recinto legislativo de la Cámara de Legisladores y el Concejo Deliberante local, y por otro lado en los piquetes que se efectuaban a las dos empresas, Solvay- Indupa y Profertil.

En septiembre se iniciaron los problemas entre el Sindicato de Químicos, Petroquímicos y afines y los Vecinos Autoconvocados, por la gran cantidad de días sin trabajo y la prohibición del paso con vehículo[97]. Aunque el salario fue garantizado por Solvay- Indupa, el gremialista Adalberto Saade demostraba preocupación por la situación laboral de los contratistas. Paralelamente a esta situación, Profertil inmediatamente resolvió despedir 35 sub- contratados. Durante ese mismo mes, Ingeniero White ya tenía varios conflictos y se sumaba al mismo una serie de medidas que favorecían la pesca de buques pesqueros de gran calado provenientes de Mar del Plata y que perjudicaban la pesca artesanal de los pescadores whitenses. Con el corte de la ría por parte de este sector, surgió una nueva manifestación en perjuicio de los pescadores de rosales, que decidieron cortar la ruta nacional nº 3, sin éxito[98].

Farías del Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas; Braulio Laurencena, Director de Medio Ambiente municipal; un representante de la UNS y Miguel Ángel Ramírez, bioquímico, en representación de la Sociedad de Fomento y la Asociación ambientalista del sur.

[94] Solicitada publicada en el diario "La Nueva Provincia", el 30 de agosto del 2000.

[95] Los estudiantes de secundarios bahienses portaron una pancarta que decía: "Víctimas de un lento homicidio, Bahía Blanca Presente", y repartieron folletos en los distintos barrios.

[96] La bancada justicialista se vio dividida durante el conflicto por aquellos que manifestaban que el Intendente, junto a su partido, no tenían el liderazgo necesario para resolver el problema, siendo *cómplices de las empresas (*Breinsteinten), y otro lado , los que brindaban un apoyo a las medidas efectuadas por que el Intendente, en un momento determinado de conflicto generalizado, *buscando soluciones conjuntas sin aprovechar las circunstancias* (Marcelo Feliú) Véase, "La Nueva Provincia" 30 de Agosto, p. 6, 1 de septiembre, p. 6, 2 de Septiembre, p. 8,

[97] La Nueva Provincia, "*El personal de Solvay- Indupa no pudo ingresar a la Planta*", 3 de septiembre, p. 6

[98] Ecodías, año 1, Nº 5, 15- 30 de septiembre del 2000, p. 2

En los días siguientes, Ruckauf firmó un decreto que delegó al Municipio el poder de fiscalización y monitoreo para el control de las empresas del Polo Petroquímico, mientras se discutía el proyecto de ley. La preocupación principal del Gobierno de Bahía Blanca se fundamentaba en la falta de especificación sobre algunos puntos del decreto: si su acción afectaba a la totalidad de las empresas y como se haría el financiamiento de los controles. La Ley Tunessi estipulaba que sean las empresas las que pague una tasa para solventar el monitoreo[99].

Vecinos Autoconvocados criticó la falta de acción política y planteó la realización de las auditorias para implementar un monitoreo eficiente. Comenzaron a utilizar otros mecanismos de protesta y planteos legales para asesorase y protegerse frente a las grandes corporaciones[100].

7. Las empresas toman el control del conflicto

El 12 de septiembre, Profertil solicitó al Comité Técnico Ambiental (CTA) que se le permitiera proseguir con el plan de trabajo preparatorio para reanudar las tareas de producción de urea, informando a la población su disposición para entregar sensores. El Comité Técnico, admitió fallas en su propio funcionamiento, ya que no puede resolver problemáticas tales como el inicio de la producción en las empresas, sin tener facultades para ejercer tal disposición. En este sentido, comenzaron a verificarse problemas con la re-apertura empresarial, ya que ninguna disposición estatal se encargaba del asunto[101].

Greenpeace consideró que más allá de la clausura que determinaron las autoridades bonaerenses de Política Ambiental debía mediar un dictamen de la Justicia Federal tendiente a impedir la puesta en marcha de las respectivas plantas[102].

Hacia mediados de septiembre, comenzó a generarse un conflicto sustancial entre la Secretaría de Política Ambiental y el gobierno municipal. La Intendencia no deseaba adjudicarse la concesión argumentando falta de financiamiento para lograr el control industrial y planteaba además que el decreto provincial resultaba inconstitucional[103].

La problemática se complejiza cuando las empresas comienzan a amenazar con suspender a su personal, por la supuesta "injustificación e ilegalidad" en la sanción de sus unidades de producción que no habían registrado problemáticas. Se amenazó con la suspensión de los servicios de contratados y proveedores. El Sindicato de Industrias Químicas Petroquímicas de Bahía Blanca enfatizó que los trabajadores no eran responsables de una situación que consideran incongruente e injusta. El gremio que citó a plenario general el 17 de septiembre,

[99] "La Nueva Provincia", 8 de septiembre del 2000, p. 6.
[100] Entrevista a Pedro, empleado, 7 de septiembre del 2000.
[101] LNP, 12 de septiembre de 2000, p 5. y 13 de septiembre del 2000, p. 5.
[102] Documento de Greenpeace, Verónica Odriozola, 13 de septiembre del 2000.
[103] LNP, 16 de septiembre del 2000, p. 8 y 9. y 17 de septiembre p. 6

cuestionó a los Vecinos Autoconvocados whitenses quienes mantenían bloqueados el acceso a la planta[104].

Los vecinos admitieron que no era su intención perjudicar a los trabajadores sino mejorar la salud de la población y las condiciones de trabajo[105]. El día 18 de septiembre se constató efectivamente las suspensiones de parte del personal en Solvay-Indupa. El gremio en estado de asamblea resolvió, por unanimidad impulsar un pedido ante la justicia. Al día siguiente (19) de la asamblea de delegados, la Secretaría de Política Ambiental levantó las clausuras que pesaban sobre las industrias satélites de Solvay-Indupa, de PVC Y CVM y la de amoníaco de Profertil por no estar directamente involucradas en los incidentes transcurridos. Entendiendo la dificultad de la lucha, los vecinos decidieron dejar libres los accesos y levantar los piquetes, esperando las auditorias prometidas. Hubo declaraciones recogidas por un diario local que afirmaban los siguiente: "*Si hay alguien que se tiene que sentir derrotado por todo esto son nuestros representantes: los políticos. El pueblo puso la cara, ellos transaron*", y "*Vamos a ser honestos, acá se quiso llegar a un enfrentamiento de pobres contra pobres, de obreros contra obreros. Nosotros nos somos desocupados. El 70 % trabaja y lo que estamos peleando es por la vida. No estamos para enfrentamientos*"[106].

Ese mismo día, 20 de septiembre, ni bien se conocieron los levantamientos de las clausuras y los piquetes, las industrias dejaron sin efecto las suspensiones de personal[107].

A un mes del primer escape, las organizaciones vecinales llamaron a una marcha del silencio con velas, sobre las principales calles de White para culminar en una misa, en agradecimiento por la vida en la parroquia Exaltación de Santa Cruz.

8. Reclamo de auditorías y división vecinal

En los días siguientes del mes de septiembre se puso en discusión que auditoria sería la indicada para realizar una inspección general a las empresas[108]. El Comité Técnico elaboró un plan de trabajo que preveía acciones tendientes a poner en marcha el plan de monitoreo de emisiones y fugas establecido en el convenio rubricado entre la comuna y la provincia, en un lapso de tres a seis meses. Los pasos implicaban: instalar sensores, establecer una base de datos que registre los índices de contaminantes en tiempo real y en forma permanente, y en caso de detectarse una mayor concentración de químicos en el ambiente, superior al establecido, activar el Plan Apell. Complementariamente, se dispuso

[104] "La Nueva Provincia", 18 de septiembre del 2000, p. 5.
[105] Entrevista a Pedro, empleado, septiembre del 2000.
[106] "EcoDias", año 1, n° 6, primera quincena de octubre 2000, p. 4.
[107] "La Nueva Provincia", 21 de septiembre del 2000, pp. 6-7.
[108] Los vecinos estimulados por Greenpeace eligieron la auditoria Oeko Institute de la ciudad alemana de Friburgo. Las empresas rechazaban tal auditora por la proximidad de ésta a Greenpeace y pidieron una auditora "neutral". La Universidad Nacional del Sur, a través de su rector, Luis María Fernández, expresó que no estaba en condiciones de realizar ninguna auditoria, pero que si podría participar en el monitoreo de control, en "La Nueva Provincia", 24 de septiembre del 2000, p. 7.

recomendar el desarrollo de cortinas y masa forestal en base a un plan elaborado por la delegación municipal.

Durante ese tiempo, se produjo un tercer escape, esta vez de gas hidrocarburo generado por la refinería de EG3- Repsol, en Ingeniero White. El escape reprodujo un nuevo brote de malestar, donde los vecinos se quejaban de la falta de correspondencia en los números telefónicos 103 y 911. Sin embargo en esa oportunidad no se realizaron piquetes[109].

El 29 de septiembre se promulgó como Ley la iniciativa de Tunessi en el Senado, marco legal que permitiría contemplar distintos roles y jurisdicciones entre la Municipalidad y la Provincia: habilitación de plantas, juzgamiento y sanción: por la provincia; fiscalización y control cotidiano, constatación de infracciones y multas: por el Municipio.

Luego de que las empresas obtuvieran el reconocimiento legal para volver a realizar sus actividades, los vecinos prosiguieron con la organización de diferentes actividades, centrándose en la fiscalización de la auditoria a realizarse en las industrias.

El 12 de octubre apareció una nueva entidad vecinal, "Vecinos por la Vida", liderada por Alejandro Díaz. Algunos de ellos habían pertenecido a "Vecinos Autoconvocados y decidieron desvincularse por manifestar ideas diferenciadas sobre la situación a proseguir frente a las corporaciones. Autoconvocados partidario de la convivencia armónica entre la empresa y la comunidad expresó la generalización de estrategias para mejorar los controles a las empresas, mientras que Vecinos por la vida, mucho más radicales, se mostraban partidarios por la erradicación definitiva[110]. La disputa pareció trasladarse a problemas en la organización y por la toma de decisiones[111]. Finalmente con posterioridad, Vecinos Autoconvocados se disolvió, alegando cansancio, malestar y amenazas continuas por parte de las empresas.

Representantes de instituciones de Ingeniero White, junto a Vecinos por la Vida, se reunieron para consensuar los pasos a seguir frente a la crisis medioambiental en los días de octubre. Tras los incidentes registrados, precisaron estar más alertas para generar mayor fiscalización conjunta. Se acordaron distintos criterios y se propuso una marcha para el 20 de octubre[112].

El 20 de octubre, se realizó un acto frente a las industrias, con una amplia movilización, en la que participan murgas locales y autoridades políticas[113].

Finalmente se presentó frente a las entidades y los vecinos, la auditoría TUV Rheinland, contratada por la provincia, que explicó frente a una asamblea una serie de pasos para analizar las empresas petroquímicas y determinar la seguridad que presentan los procesos

[109] "La Nueva Provincia", 28 de septiembre del 2000, p. 8
[110] Entrevista a Ignacio, 6 de agosto del 2010.
[111] "La Nueva Provincia", 14 de octubre del 2000, p. 7.
[112] Entre los principios que se expresaron fueron: No a la radicación de la empresas contaminantes; No a la ampliación de las actuales; Si a la instalación de plantas no contaminantes; Si a la re-activación del puerto de cargas; Si a la erradicación de las industrias en un mediano plazo.
[113] "La Nueva Provincia", 21 de octubre del 2000, p. 8.

productivos, concluyendo su análisis en un informe escrito que sería posteriormente publicado[114]. Las asociaciones vecinales y otros sectores, demostraron cierta desconfianza inicial frente a los dichos que realiza la empresa auditora.

9. Últimos escapes y fin de las protestas

Durante la primera semana de noviembre se registraron distintos escapes de amoníaco producto del venteo regular de la empresa Profertil. Sin embargo, el 9 de noviembre, el gas sobrepasó los niveles normales de registro permitido y propició una movilización importante de vecinos indignados por la situación y los intensos olores, en la delegación whitense[115].

En la delegación municipal los vecinos decidieron utilizar los bancos, sillones y muebles como apostadero de protesta, aguardando la presencia de las autoridades. Vecinos Por la Vida utilizando vías legales intimó a Profertil a dejar de acusar molestias de ruidos y olores a los habitantes de Ing. White y Bahía Blanca en un plazo de 48 horas, mediante una carta documento. Las autoridades escolares se sumaron a la manifestación pidiendo mayores controles.

Ante esta situación, la empresa esbozó una defensa similar a la que utilizó Solvay-Indupa, basándose en informaciones técnicas poco comprobables por la parte perjudicada. A su vez, no se adjudicaba la responsabilidad de las emisiones de amoniaco sobre los decibles permitidos (72,9). En una solicitada al diario local, reforzaba su posición acerca de la convivencia pacífica y armónica entre la industria "como factor de desarrollo y la calidad de vida"[116].

Durante el transcurso del conflicto suscitado en el mes de noviembre los Vecinos whitenses y especialmente la agrupación Vecinos Por la Vida solicitaron concretamente a través de un petitorio la erradicación definitiva de la planta de urea, de cloro-soda, la no-instalación de más empresas, pidiéndose la renuncia de los señores Braulio Laurencena y Hugo Fioravanti (Defensa Civil), por su falta de aptitud y la efectiva consideración de un estudio respecto a la desvalorización de los inmuebles, con la posibilidad de que se efectuara un descuento del 50% en los impuestos de la localidad de White, Villa Rosas y Barrios aledaños. En otra parte de la zona, los manifestantes cortaron el acceso a la empresa Profertil, aunque dejaban pasar a los obreros y empleados a razón de una hora por día[117].

El fiscal De la Cruz en posteriores investigaciones imputó a Profertil por la violación de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Residuos Tóxicos, responsabilizando, conforme se desprende de los testimonios y pruebas, a Giuseppe Merelli (Gerente de la puesta en marcha de Snampro-Techint, la contratista) y en Andrea Scotto (supervisora de la planta de

[114] Documento público "Plan de trabajo TUV Rheinlnad"
[115] "La Nueva Provincia", 10 de noviembre del 2000, p. 6.
[116] "La Nueva Provincia" 9 de noviembre del 2000, p. 6.
[117] "La Nueva Provincia", 11 de noviembre del 2000. p. 6.

urea y miembro de la misma Unión Transitoria de Empresas). Con posterioridad, el Juez Luis Dardanelli Alsina se declaró incompetente para intervenir en este caso.

El pedido de erradicación propuesto por Vecinos por la vida, no tuvo una buena aceptación dentro del sector político y fue intensamente discutido por sectores sindicales, que sugerían aumentar la eficiencias en los controles[118].

A fines del mes de noviembre, finalmente se terminó la auditoria de la empresa alemana, presentando algunas de sus conclusiones. En ese informe, la auditora realizó un estudio de riesgo indicando que el accidente más grave que podría suceder en Profertil traería consecuencias en un radio de 750 metros de la planta. Si la distancia quedaba corroborada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, se podría transformar en un aval para los propietarios de inmuebles que se encontraban dentro de dicha zona y podían solicitar, una indemnización para mudarse. En este sentido Omar Curcio, Secretario de la Asociación Vecinal de la Costa[119], consideró inadecuada la distancia mencionada en la reunión, explicando que el radio es mucho mayor. Graciela Arcidiácono (UCR) se mostró disconforme con la auditoría "ya que se evaluaba un impacto accidental y no se observaba las condiciones en que se encontraban las plantas ni se evaluaba sobre las mejoras necesarias modificables para que funcionen correctamente los controles"[120].

El conflicto en las calles terminó con esta última resolución de la auditoria, aunque los vecinos continuaron con sus reclamos, circunscriptos en sus respectivas asociaciones. Los cortes se detuvieron y con el tiempo se llegó a una posición de desmovilización por parte de la comunidad[121]. Se abre una etapa de diálogo entre el municipio y las entidades vecinales que en muchos casos terminaron con la cooptación política de estas últimas o su disolución[122].

Discusión y análisis de los conflictos sociales

La conflictividad social derivada de los escapes de productos químicos, de alta peligrosidad, no fue producto de un simple hecho aislado sino que formaba parte de una demanda histórica de los vecinos, que ya había luchado frente a la utilización de carbón por parte de la termoeléctrica, contra el ingreso de cargamento de metanol y frente a la contaminación de la ría o las rajaduras de sus viviendas.

Las formas de protesta social que adoptaron los vecinos whitenses remitieron a un contexto

[118]"La Nueva Provincia", 14 de noviembre del 2000 p. 6.
[119] Nueva entidad que nace de los conflictos y las divisiones entre vecinos, que busca a partir de un reclamo político la indemnización de los vecinos del Barrio 26 de septiembre.
[120] Entrevista a Graciela, docente, 19 de agosto del 2010.
[121] Entrevista a Claudia Schnaps, empleada, agosto del 2014.
[122] Ecodias, año°1, n°10, primera quincena de noviembre 2000, p. 3.

político en el cual los piquetes, petitorios y asambleas comienzan a transformarse en mecanismos de demanda social y exposición de las problemáticas en todo el país (Svampa y Pereyra, 2003). Se propicia el órgano asambleario como ámbitos de discusión e intercambio, permitiendo de este modo visibilizar las inquietudes y las soluciones como canal de expresión democrática, resultando de este modo espacios de presión sobre los intereses económicos y sociales en pugna.

Entre las características que han podido observarse en las acciones colectivas puede verificarse una supuesta desvinculación con la política partidaria. Esta postura resultaba de alguna forma contradictoria con su propio accionar, basado en la búsqueda de consensos con distintos sectores políticos. En las manifestaciones generales se observó que la improvisación y la espontaneidad fueron las características que definieron las acciones, encabezadas por los vecinos. Esto no significó que la misma estuviera exenta de organización, lo cual puede advertirse en la voz de los propios protagonistas que destacaron su relación con un pasado sindical.

El concepto "vecino" utilizado por los sujetos entrevistados puede pensarse como un término controvertido. Según nuestra concepción los vecinos y manifestantes del conflicto social pertenecen a un entramado de relaciones sociales que no los desligan del carácter de clase que atraviesa al sistema capitalista en su totalidad, perteneciendo en su mayoría a los estratos asalariados o pequeños cuentapropistas de la sociedad whitense, que se encontraban en un período de estancamiento y pauperización social, según los manifestado a través de la percepción de los protagonistas.

Las diferencias vecinales en relación al conflicto comenzaron a producirse cuando la argumentación por la erradicación de las empresas decayó en el transcurso del proceso. Esta situación debe comprenderse dentro del marco discursivo y las presiones ejercidas por las propias empresas y el poder político, que debilitaron los esquemas de lucha y favorecieron sus estrategias de posicionamiento.

En un momento del proceso de conflictividad, el reclamo y la acción ofensiva vecinal comenzó a descender al aparecer el marco legal de la Ley Tunessi, que provocó una supuesta esperanza de regulación y control sobre las empresas de tercera categoría. Por otra parte, se produjeron despidos propiciados por las empresas que indujeron al sindicato de petroquímicos a movilizar a sus trabajadores contra las proclamas de los vecinos que habían cortado los accesos al puerto. Esta medida, impulsó una división concreta entre asalariados y manifestantes como estrategia empresarial, que determinó la finalización de los piquetes y el enfrentamiento inter-clasista, favoreciendo la libre circulación de recursos y la concentración de ganancias.

El poder ejecutivo municipal utilizó argumentaciones técnicas para explicar los escapes tóxicos, con un lenguaje que dificultaba su comprensión y redundaba en una única solución mediante el aumento de la seguridad y los controles. En la evolución del conflicto social, fue posible percibir una escalada de tensión entre los niveles políticos provincial (Buenos Aires) y local, en cuanto a la responsabilidad sobre el control y monitoreo de las industrias. Sobre

esta cuestión, las diferencias tuvieron varios factores de origen, entre ellas las problemáticas de financiación por parte de los municipios, la presión de las empresas sobre el ámbito local y el ámbito de aplicación legislativo, entre otros.

Las empresas esgrimieron distintas estrategias para argumentar sobre las problemáticas ambientales. A través de solicitadas en los diarios o comentarios de entrevistas, desarrollaron un proceso de des-responsabilización de la situación, minimizando los riesgos, y comprometiéndose con la sustentabilidad ambiental. La imposición de un lenguaje técnico y de conocimientos basados en tecnología avanzada y herramientas de medición propias, condicionaron y desequilibraron la discusión a favor del poder económico. De esta manera, las empresas promovieron una auto-legitimación del saber cómo únicos poseedores y constructores del conocimiento, condicionando cualquier discusión dentro del ámbito científico (Galafassi, 2004).

Las estrategias empresariales buscaron recomponer su presencia implementando acciones contraproducentes para la comunidad. Entre ellas figuraron las amenazas, suspensiones y despidos del personal, presionando al medio político para retomar su producción. Este mecanismo de coacción y coerción tuvo por finalidad promover la división social entre trabajadores de las plantas y sindicatos contra los "vecinos piqueteros"[123]. Los sindicatos de la UOCRA y de SPIQPYA (Sindicato del Personal de industrias Químicas, Petroquímicas y Afines) se apropiaron del discurso empresarial en disonancia con algunos de sus propios trabajadores que en muchos casos se habían solidarizado con los vecinos.

Los conflictos decaen cuando empezaron a realizarse las auditorias técnicas sobre las empresas, organizadas y contratadas por las mismas petroquímicas y aprobadas por el gobierno municipal. En su informe final, la auditoría realizó un estudio de impacto superficial, enfocando el análisis en la comprobación de los riesgos accidentales como medida fundamental y el establecimiento de mayores controles.

Con posterioridad las luchas colectivas vecinales se mantuvieron durante gran parte del período, en un estado constante de alerta y reclamo. Sin embargo, la gran mayoría de la población dejó lentamente de participar en organizaciones vecinales independientes. El Comité Técnico Ejecutivo establecido como medio de control principal, se convirtió en el ente observador y la fuente de reclamos principal. Su papel de vigilancia se encuentra en la actualidad vinculado al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que labora un acta de denuncia o emite una multa de acuerdo a la gravedad del accidente industrial.

Este estudio sobre conflictos socioambientales, pretende ser una primera aproximación a una problemática compleja que sobrepasa los términos relacionados con la contaminación

[123] Las empresas petroquímicas comenzaron, a partir del 2000, un proceso de responsabilidad social empresarial, auspiciando ciclos culturales, televisivos, radiales, propagandas sobre el cuidado del medio ambiente y el transito, así como donaciones a entidades deportivas, buscando de esa manera trasmutar su imagen y recibir menos críticas sociales (Heredia Chaz, 2011).

ambiental para discutir sobre la concentración del capital extranjero, las formas de trabajo informal y precarizado, las movilizaciones sociales y sus relaciones con la política, en un espacio complejo de múltiples intersecciones, que exceden el ámbito local y nacional para insertarse en la problemática latinoamericana.

Referencias

Alimonda, Héctor (2011), La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana, en Alimonda, Héctor (Coord.), *La Naturaleza colonizada*, Buenos Aires, Ed. Ciccus.

Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo (2004) Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales, en Petras, James y Veltmeyer, Henry (Eds.) *Las privatizaciones y la desnacionalización de América Latina*. Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 55-112.

Bellini, Edda (2000) El área de influencia del Polo Petroquímico ¿lugar o espacio de riego?, en *Escritos Contables*, nº 41, Bahía Blanca, pp. 133-144.

Boron, Atilio (2004), Hegemonía e imperialismo en el sistema internacional, en Boron, A. (Comp.) *Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Cernadas de Bulnes, Mabel (Comp.) (2001), *Historia, política y sociedad en el Sudoeste Bonaerense*, Bahía Blanca, EdiUNS.

Chudnovsky, D y A. López (1994), *Del asistido al capitalismo incierto. El caso de la industria petroquímica en Argentina*, Santiago de Chile, CEPAL/CIID.

Galafassi, Guido (2004), *Naturaleza, sociedad y alienación*, Montevideo, Nordan-Comunidad.

Gerchunoff, Pablo y Torre, Juan (1996), La política de liberalización económica en la administración de Menem, en *Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 36, N° 143, Buenos Aires.

Gorestein, Silvia (1991), *El rol del complejo petroquímico bahiense en el desarrollo urbano-regional*, Informe Conicet, Departamento de Economía, Bahía Blanca, EdiUNS.

Gorestein, Silvia, Viego, Valentina y Burachik, Gustavo (2006), Complejos industriales y desarrollo localizado: temas seleccionados del debate teórico, en Gorestein S, y V. Viego (Comps.), *Complejos productivos basados en recursos naturales y desarrollo territorial*, Bahia Blanca, EdiUNS, pp: 17-58.

Harvey, David (2004), El nuevo imperialismo. Madrid, Akal.

Heredia Chaz, Emilce (2011), De la Responsabilidad a la Contaminación Social Empresarial Un recorrido desde el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Primera entrega: de cómo empezó todo…, en *Actas de las XII Jornadas Inter-Escuelas Departamentos de Historia*, Universidad Nacional de Catamarca.

Leff, Enrique (2006), La ecología política en América Latina: un campo en construcción, en Alimonda, H. *Los tormentos de la materia- aportes para una ecología política latinoamericana*, Buenos Aires, Clacso.

Lopez A. y M. Chidiak (1995), *Reestructuración productiva y gestión ambiental en la petroquímica Argentina*, Documento de Trabajo, No 18, Buenos Aires, CEPAL/ UNCTAD.

Martinez Allier, Joan (2004), *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*, Barcelona, Icaria.

McAdam, Doug, McCarthy, Jhon D. y Zald, Mayer N. (1996), *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures and cultural framings*, Cambridge/New York, Cambridge University Press.

Melucci, Alberto (1994), ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?, en Laraña C. y Gusfield J., *Los nuevos movimientos sociales de la ideología a la identidad*, Madrid, Centro de investigaciones Sociológicas.

Millán, Mariano (2009) Los análisis contemporáneos sobre movimientos sociales y la lucha de clases, en *Revista de Conflicto Social*, año 2, N° 1. Buenos Aires, Instituto Gino Germani-Universidad de Buenos Aires.

Noda, Martín (2004), Países imperialistas e imperialismo capitalista, en *Lucha de Clases*, n°4, Buenos Aires, IPS.

O´Connor, James (2001), *Causas naturales- ensayos del marxismo ecológico*, México, Siglo XXI.

Offe, Claus (1985), New social Movements: challenging the bundaries of institucional politics, en *Social Research*, Vol. 54, N° 4, Arien Mack Ed., US.

Odisio Juan, (2008), El complejo petroquímico de Bahía Blanca: una historia sinuosa, en *Estudios Ibero-Americanos*, Vol. 34, No 2, Bahía Blanca.

Palacio, Germán (2006), Breve guía de introducción a la Ecología Política, en *Revista Gestión y Ambiente*, Vol. 9, N° 3, Universidad de Colombia- Universidad de Antioquía.

Parga, Rocío, (2007), La resistencia de los whitenses ante el avance de lo global, en: Cernadas de Bulnes M. y Marcilese, J. (Comp.) *Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del sudoeste bonaerense*, Bahía Blanca, EdiUNS, pp: 385- 392.

Romero, Fernando (2009), El capital extranjero en el sistema agroalimentario pampeano, en AA. VV., *Documentos del CIEA*, n° 4, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

Seoane, José (2012) Significación y características de las disputas por los bienes comunes naturales en Argentina y América Latina, en *Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales*, n° 4, Bahía Blanca, Ed. CEISO, pp. 77- 98.

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara (2013), *Extractivismo, despojo y crisis climática*, Buenos Aires, Ed. El Colectivo, Herramienta.

Svampa Maristella y Sebastián Pereyra (2003), *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*, 2ª de., Buenos Aires, Biblos.

Tarrow, Sidney (1997), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza Editorial.

Tolcachier, Fabiana (2004), *Historia del pueblo de puerto. Ing. White, Ingeniero White*, Museo del Puerto (mimeo).

Touraine, Alain (1990), *Movimientos sociales de hoy. Actores y analistas*, Barcelona, Hacer.

Torre, Elena (2007), Voces y tensiones en torno a un conflicto en un espacio de complejidad, en: Cernadas de Bulnes M. y Marcilese J., *Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del sudoeste bonaerense*, Bahía Blanca, EdiUNS, pp: 393- 402.

Vasilasachis de Gialdino, Irene (2006) La investigación cualitativa, en Vasilasachis de Gialdino, Irene (Coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, España, Gedisa, pp. 23-64.

Vera Alpuche, Jaime (2013), La dimensión discursiva en los conflictos sociambientales: apuntes para un método de análisis del discurso desde la ecología política, en *Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales*, n° 5, Bahía Blanca, Ed. CEISO, pp. 137- 162.

Vizia, Claudio (2011), *¿Un Marx verde? Antropología, Ecología y Marxismo*, Buenos Aires, Ed. Kaikron.